

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR: San Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

El día 12/05/2017 se recibió escrito presentado por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, mediante el cual interpuso denuncia en contra de _____, S.A de C.V. y _____, S.A de C.V., por supuestos incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor (en adelante LPC).

I. En este estado del procedimiento este Tribunal debe hacer las siguientes consideraciones:

De acuerdo a la estructura que el legislador ha diseñado para el procedimiento sancionatorio en la LPC, existen básicamente tres etapas: inicio, apertura a prueba y resolución final. Para el examen liminar, el artículo 144 de la LPC establece un plazo de cinco días, dentro de los cuales este Tribunal debe resolver sobre el inicio del procedimiento. Por otra parte, una vez concluidas las actuaciones dentro del mismo, este Tribunal debe dictar resolución en el plazo máximo de diez días, conforme lo estipula el artículo 147 de la citada normativa.

Lo anterior, obedece a que la determinación de plazos en la ley son concreciones de los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, en tanto posibilita un pronto diligenciamiento del procedimiento y permite al administrado poder proyectar su conducta futura de acuerdo a pautas generales de previsibilidad.

La doctrina es unánime en sostener que no existe violación de derechos ni garantías fundamentales cuando el incumplimiento de los plazos legales se encuentra debidamente justificado en aspectos como la complejidad fáctica y jurídica del caso y cualquier otra causa que habilite al ente administrativo sobrepasar los plazos determinados en la ley, siempre y cuando el retraso y exceso estén dentro de los parámetros de la razonabilidad.

Asimismo, la doctrina reconoce que la acumulación de procesos en los Tribunales imposibilita que se le exija al Juez cumpla con el procedimiento exacto del plazo, pues el exceso en la carga del trabajo excede del alcance de su diligencia.

Desde esa perspectiva, resulta admisible que la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos sobrepasen los plazos legales, siempre y cuando el retraso se encuentre suficientemente justificado en situaciones que pudieran explicar la demora o paralización de la actuación de la administración, sin que ello implique por sí vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Es conveniente aclarar que el período transcurrido después del plazo legal en el presente procedimiento sancionatorio no ha sido arbitrario, sino que se debe a causas justificadas como el volumen de trabajo y nuevas competencias atribuidas a este Tribunal contenidas en leyes especiales, lo cual implica instruirse y conocer los casos sometidos a conocimiento del mismo.

Ahora bien, la Ley de de Procedimientos Administrativos, que entró en vigencia el día 14/02/2019 - LPA, de aplicación supletoria en el presente procedimiento- establece que la



a) Declarar extinguida la responsabilidad de [REDACTED] S.A de C.V. y [REDACTED], S.A de C.V., por la prescripción de la posible infracción atribuida.

b) Archívese el presente expediente una vez quede firme la presente resolución.

c) Se hace del conocimiento de las partes interesadas que esta resolución admite el recurso de reconsideración, el cual puede ser interpuesto ante este Tribunal en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su notificación en la siguiente dirección: 7ª Calle Poniente y Pasaje "D" #5143 Colonia Escalón, San Salvador.

d) *Notifíquese.*



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.

JS



